



GD-F-008 V.9

Página 1 de 8

**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20174010159235 DEL 15/09/2017**

**“Por la cual se resuelve una solicitud de revocatoria directa”**

**LA DIRECTORA TÉCNICA DE GESTIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

En ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en el artículo 2.3.5.1.2.1.5. del Decreto 1077 de 2015, en la Resolución No. SSPD 20171300104825 de 2017, la Ley 1437 de 2011 y

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

Que mediante Resolución No. SSPD 20164010056045 del 30 de septiembre de 2016, que decidió sobre la vigencia 2015, la Superintendencia decidió DESCERTIFICAR al municipio de RAMIRIQUÍ en el departamento de BOYACÁ, por no haber cumplido el siguiente requisito previsto en el artículo 2.3.5.1.2.1.6. del Decreto 1077 de 2015:

*- “Reporte en el SUI el Acuerdo de aprobación de los porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con los porcentajes señalados e la Ley 1450 de 2011 o la norma que lo modifique, complemento o sustituya”*

La referida resolución se notificó personalmente al municipio de RAMIRIQUÍ, el día 27 de octubre de 2016, tal y como se observa en el expediente.

Que el municipio de RAMIRIQUÍ en el departamento de BOYACÁ, mediante radicados Nos. 20165290772682 y 20165290779452 de 11 y 15 de noviembre de 2016, respectivamente, interpuso oportunamente recurso de reposición contra la resolución de descertificación, el cual fue resuelto por medio de la resolución No. 20174010004905 de 9 de marzo de 2017, mediante la cual se confirmó el acto administrativo inicial.

La resolución No. 20174010004905 de 9 de marzo de 2017 fue notificada por aviso el 9 de mayo de 2017, por lo que el acto administrativo de descertificación quedó en firme el 10 de mayo de la misma anualidad.

Que el municipio de RAMIRIQUÍ en el departamento de BOYACÁ, mediante escritos radicados bajo los Nos. 20175290547902 (escrito incompleto) y 20175290551512 de 14 y 17 de julio de 2017, presentó solicitud de revocatoria directa de las Resoluciones Nos. 20164010056045 del 30 de septiembre de 2016 y 20174010004905 de 9 de marzo de 2017.

**2. ARGUMENTOS Y DOCUMENTOS APORTADOS CON LA SOLICITUD DE REVOCATORIA**

**2.1 De los argumentos presentados con ocasión a la solicitud de revocatoria**

Como argumentos de la solicitud de revocatoria, se alegaron los siguientes por parte del ente territorial:

2.1.1 Manifestó que no tuvo conocimiento del auto de pruebas decretado previo a proferir la resolución de descertificación.

2.1.2 Indicó que la decisión de descertificación, además de desconocer su cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, viola el debido proceso y desconoce el derecho de defensa del ente territorial, causa un agravio injustificado al municipio.

308

2.1.3 Adujo que el competente para resolver la solicitud de revocatoria es, jerárquicamente, el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, ante quien interpone dicha solicitud, toda vez que a juicio del municipio, es quien puede de manera más objetiva o imparcial resolverla.

2.1.4 Indicó que expidió el acuerdo municipal No. 010 de 21 de agosto de 2012, por medio del cual se modifica parcialmente el acuerdo No. 014 del 5 de diciembre de 2011, determinando los porcentajes de subsidio según lo establece el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011, situación que fue reconocida por la Superintendencia.

2.1.5 Alegó que los acuerdos reportados gozan de presunción de legalidad, con plena vigencia para la facturación y cobro de los servicios públicos y que han venido sido utilizados para cumplir la finalidad de la Ley 1176 de 2007 en las anualidades de 2011 a 2014 por lo que no es justificable que la Superintendencia lo desconozca y descertifique al municipio.

2.1.6 Argumentó que pese a que en la resolución inicial se indicó que el acuerdo No. 010 de 2012 cumplía con los porcentajes pero estaba incompleto, con ocasión al recurso de reposición se desconoce dicha circunstancia indicándose que los acuerdos aportados siguen incompletos y no cumplen con las disposiciones de ley, afectando la seguridad jurídica e imposibilitando el ejercicio del derecho de defensa y del debido proceso para el ente territorial, máxime cuando no tuvo conocimiento del auto de pruebas proferido previo a la descertificación y de esta forma no pudo ejercer su derecho a la defensa y contradicción y se vulneraron los principios de congruencia y conservación del derecho.

Señaló que el correo electrónico al cual se envió el auto de pruebas, no estuvo habilitado sino hasta el mes de marzo de 2017 y tampoco recibió el auto de pruebas por correo certificado, hecho último respecto del cual presentó derecho de petición a la compañía 472.

2.1.7 Se desconoció que reportó dichos acuerdos para las anteriores vigencias y que estos no fueron objeto de reproche alguno por parte de la Superintendencia.

## **2.2. De los documentos aportados con la solicitud de revocatoria.**

Con la solicitud de revocatoria el municipio aportó los siguientes documentos:

- Copia de la Resolución No. 20164010056045 del 30 de septiembre de 2016 por la cual se decidió el proceso de certificación para la vigencia 2015.
- Copia del escrito de reposición interpuesto por el municipio contra la resolución de descertificación.
- Copia de la Resolución No. 2017401004905 del 9 de marzo de 2017 por la cual se resuelve un recurso de reposición.
- Acuerdo municipal No. 014 de 2011 por el cual se establecen porcentajes de subsidio y contribución.
- Acuerdo municipal No. 010 de 2012 por el cual se modifica el Acuerdo municipal No. 014 de 2011.
- Petición dirigida a la empresa 472
- Certificación donde consta que el correo [contactenos@ramiriqui-boyaca.gov.co](mailto:contactenos@ramiriqui-boyaca.gov.co) solo fue habilitado hasta el mes de marzo de 2017

Los anteriores documentos, con su valor legal se incorporan en el expediente.

## **3. ANÁLISIS DE LOS ARGUMENTOS DEL ENTE TERRITORIAL**

La figura jurídica de la revocatoria directa, consiste en la potestad legal atribuida a la administración en cabeza del funcionario que profirió el acto o en su defecto a su superior jerárquico, de oficio o a petición de parte, para que suprima de la vida jurídica una decisión administrativa contraria a la Constitución Política o a la ley; al interés público o social, o atenten contra él; o cuando cause un agravio injustificado a una persona, causales previstas en el artículo 93° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), que dispone:

*“ARTÍCULO 93. CAUSALES DE REVOCACIÓN. Los actos administrativos deberán ser revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:*

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la Ley.
2. Cuando no están conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Señaladas las causales de revocatoria, el legislador también estableció unos límites frente a su ejercicio, regulando los motivos de improcedencia de la solicitud de revocatoria, como sigue:

**“ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial.” (Negrilla fuera del texto)**

Ahora bien, para el caso concreto se deben diferenciar dos ejes temáticos los cuales están esgrimidos por el municipio en su solicitud de revocatoria:

### 3.1 Consideración previa

Teniendo en cuenta que el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), establece lo siguiente:

**“ARTÍCULO 74. RECURSOS CONTRA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Por regla general, contra los actos definitivos procederán los siguientes recursos:**

1. El de reposición, ante quien expidió la decisión para que la aclare, modifique, adicione o revoque.
2. El de apelación, para (sic) ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito.

**No habrá apelación de las decisiones de los Ministros, Directores de Departamento Administrativo, superintendentes y representantes legales de las entidades descentralizadas ni de los directores u organismos superiores de los órganos constitucionales autónomos. (...)** (negrilla fuera de texto)

Teniendo en cuenta lo señalado por la norma, se colige que contra las decisiones emitidas por el Superintendente de Servicios Públicos no procede recurso de apelación **al no tener superior funcional ni jerárquico dentro de sus estructuras organizacionales.**

Ahora bien, la Constitución Política se ha ocupado del tema de la delegación, especialmente en los artículos 209 a 211, determinando las condiciones generales en que dicha figura puede ejercitarse por parte de las autoridades administrativas; particularmente, el artículo 211 de la Carta Política dispone lo siguiente:

**“La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades...”**

Del precepto constitucional señalado, se colige que en relación con el Presidente de la República, la delegación únicamente procederá frente a aquellas funciones que la ley expresamente le permita delegar, es decir, que no podrá desprenderse de aquellas en donde no exista dicha autorización; a contrario sensu, las demás autoridades administrativas, entre las cuales se cuentan las Superintendencias, podrán ejercer dicha facultad, en relación con todas sus competencias, excepto aquellas que en virtud de prohibición legal no se puedan delegar.

De esa manera, la delegación debe entenderse como una forma a través de la cual se desarrolla la función administrativa, que en aras de lograr la eficacia y agilidad de la misma, permite la transferencia de determinadas funciones que por mandato legal se encuentran en cabeza de un determinado funcionario.

En lo que tiene que ver con las funciones constitucional, legal y reglamentariamente asignadas al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no existe norma que limite su capacidad de delegación, por lo que se debe concluir que la Superintendente puede delegar todas sus funciones, sin perjuicio de que pueda, en cualquier momento, reasumirlas.

En este orden de ideas, teniendo en cuenta que las decisiones administrativas adoptadas en ejercicio de facultades delegadas, surgen como consecuencia de la delegación de funciones, que



implica que la función administrativa delegada se supone jurídicamente realizada por su titular originario, pues el delegatario reemplaza para todos los efectos al delegante.

Es así que, cuando los Superintendentes Delegados, Directores o demás funcionarios investidos de facultades delegadas por el Superintendente de Servicios Públicos, emiten decisiones en virtud de dicha delegación, debe entenderse que subrogan al Superintendente frente a las respectivas funciones, razón por la cual, en aplicación de la regla general, esas decisiones no tienen superior jerárquico para tramitar recursos o solicitudes de revocatoria.

Ahora bien, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007 mediante la cual *"se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones"*, es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico (SGP-APSB) o de retirarla según sea el caso, a los distritos y municipios del país.

A su vez el artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015 estableció que *"La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el parágrafo del artículo 4º de la Ley 1176 de 2007."*

En este orden de ideas, el Superintendente de Servicios Públicos mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, delegó en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos a través de los cuales se certifique o descertifique a los municipios y distritos, en lo relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico, aclarar dichos actos y resolver los recursos que contra ellos se presenten.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, es absolutamente claro que la resolución de descertificación, al haber sido expedida en desarrollo de las funciones establecidas en cabeza del Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios por el artículo 4º de la Ley 1176 de 2007 y el artículo 2.3.5.1.2.1.5 del Decreto 1077 de 2015, que fueron en principio delegadas a los Superintendentes Delegados mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017 y luego en la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, mediante Resolución No. SSPD 20171300104825 de 29 de junio del 2017, está cobijada por la restricción de la que trata el numeral 2 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

Teniendo en cuenta lo anterior, se concluye que:

- 1) - En virtud de lo dispuesto en el artículo 211 constitucional y teniendo en cuenta que no existe restricción legal alguna, frente a la posibilidad que tiene el Superintendente de Servicios Públicos para delegar funciones, se concluye que dicho funcionario puede delegar todas y cada una de las funciones que constitucional y legalmente le han sido asignadas, sin perjuicio de que pueda reasumir las competencias delegadas en cualquier momento.
- 2) - Los actos emitidos en virtud de delegación de funciones hecha por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, no tienen superior jerárquico.

Así las cosas, es claro que la solicitud de revocatoria no será resuelta por el Superintendente de Servicios Públicos, sino por la Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado, en virtud de la delegación de funciones hecha a ella y conforme a lo previamente expuesto, sin que se afecte de manera alguna la objetividad e imparcialidad que caracteriza a cada uno de los funcionarios en quien ha sido delegada la función de adelantar el proceso de certificación que nos ocupa dentro de esta Superintendencia.

### **3.2 De los argumentos relacionados con una expedición del acto de descertificación con una manifiesta oposición a la Constitución Política o a la Ley.**

Se advierte que, si bien el municipio citó la configuración de la causal 3, la mayor parte de las argumentaciones del ente territorial están relacionadas con la causal 1 establecida en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011.

En efecto, el municipio reiteró lo señalado en su recurso de reposición en lo atinente a no haber conocido el auto de pruebas decretado previo a proferir la resolución de descertificación, lo que a su juicio vulneró el derecho de defensa, el debido proceso, los principios de congruencia y conservación del derecho y se afectó la seguridad jurídica; que la resolución de descertificación desconoce su cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011; que los

acuerdos reportados gozan de presunción de legalidad, con plena vigencia para la facturación y cobro de los servicios públicos y que han venido siendo utilizados para cumplir la finalidad de la Ley 1176 de 2007 desde 2011 a 2014 por lo que a juicio del municipio, no es justificable que la Superintendencia lo desconozca y lo descertifique, cuando los acuerdos en cuestión no fueron objeto de reproche alguno por parte de la Superintendencia en vigencias anteriores.

En este orden de ideas, se advierte que los argumentos expuestos en el inciso anterior están relacionados primeramente con la causal 1 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, toda vez que con estos, el ente territorial pretende que se declare que el Despacho no adoptó un procedimiento establecido en la ley, o la posibilidad de exonerarse de responsabilidad con base en causales legales o la inaplicabilidad de las consecuencias de la descertificación que establece el Decreto 1077 de 2015, todas argumentaciones que pretenden aludir a una supuesta expedición del acto de descertificación con una manifiesta oposición a la Constitución Política o a la Ley, respecto de lo cual se advierte que existe una improcedencia de la solicitud de revocatoria del ente territorial, conforme a lo establecido en el artículo 94 de la precitada Ley a saber:

***"ARTÍCULO 94. IMPROCEDENCIA. La revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1 del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial." (Negrilla fuera del texto)***

Sobre el particular, se debe señalar que no basta con que el ente territorial señale que el objeto de su revocatoria es la configuración de causales cuyo trámite sería procedente en esta instancia, cuando los argumentos expuestos en el presente acápite se relacionan directamente con la primera causal en comento y la oportunidad legal para presentar dichos argumentos fue el recurso de reposición interpuesto por el ente territorial y el cual fue resuelto mediante la Resolución No. 20174010004905 de 9 de marzo de 2017, decisión que, como ya se advirtió, quedó en firme el 10 de mayo del mismo año.

Así las cosas, este Despacho advierte que la vía gubernativa se encuentra agotada y en tal sentido, esta Superintendencia carece de competencia para tramitar una tercera instancia y abrir a discusión actuaciones que se encuentran legalmente concluidas.

Por consiguiente, es claro que la decisión de descertificación fue proferida conforme a derecho y respecto a los argumentos de la revocatoria relacionados párrafos atrás, no cabe discusión alguna en esta instancia, lo que de suyo conlleva a establecer que tampoco se configura la causal 3 del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, cuando al haberse proferido la resolución conforme a derecho y operar las consecuencias establecidas en el Decreto 1077 de 2015 para la descertificación del municipio, la resolución de descertificación cuya revocatoria se solicita no causa agravio injustificado a una persona.

Ahora bien, respecto de los argumentos presentados por el ente territorial en relación con la resolución que resolvió el recurso de reposición, este despacho se permite señalar lo siguiente:

En primer lugar, no es cierto que en la resolución que resolvió el recurso de reposición interpuesto por el ente territorial se haya señalado que los acuerdos aportados por el municipio con su escrito de reposición hayan estado incompletos. Lo que se indicó fue que no cumplían con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 1450 de 2011. Lo anterior en los siguientes términos:

Por otra parte, argumenta el recurrente que, tanto el Acuerdo No. 014 de 2011 como el Acuerdo No. 010 de 2012, tienen plenamente establecidos los porcentajes de subsidios para los estratos 1, 2 y 3 y las contribuciones para los estratos 5, 6 y los usos industrial y comercial.

No obstante, una vez revisados los acuerdos municipales referidos, los cuales fueron allegados con el recurso de reposición, se pudo establecer que no cumplen con lo indicado en el artículo 125° de la Ley 1450 de 2011, por las siguientes razones:

El Acuerdo No. 010 de 2012, modificó el artículo tercero del Acuerdo No. 014 de 2011, respecto de los porcentajes de subsidios del servicio de aseo, pero no hizo lo mismo respecto del porcentaje de subsidios de los servicios de acueducto y alcantarillado, dejando intacto el artículo segundo del Acuerdo No. 014, el cual dispuso que serán **hasta el 50%** para el estrato 1, **hasta el 40%** para el estrato 2 y **hasta el 15%** para el estrato 3, **sin definirlos**.

20174010004905

Página 4 de 5

Ahora bien, en lo atinente a la definición de los porcentajes de subsidios para acueducto y alcantarillado que no se efectuó en los actos administrativos objeto de pronunciamiento, es importante indicar que la norma requiere que el municipio establezca unos porcentajes dentro de unos rangos que esta suministra, por lo cual no es de recibo que el municipio deje abierto ese rango en el acto administrativo que los regula con la expresión "*hasta*". De hecho lo que le corresponde al Concejo Municipal, es concretar el porcentaje de subsidios y contribuciones respetando unos mínimos y máximos, es por eso que en este caso se presenta una clara indeterminación sobre el particular.

Es así, como mediante el artículo 2.3.4.2.2. del Decreto 1077 del 2015, el Gobierno Nacional reglamentó la metodología para la consecución del equilibrio entre los subsidios y las contribuciones y dispuso que el Concejo Municipal definirá los porcentajes de subsidios y aportes solidarios, previo el agotamiento de una serie de etapas que deberán derivar en el equilibrio en comento, el cual no es posible conseguir si no se puntualiza el porcentaje de subsidio a otorgar y el requerido como contribución para el efecto.

Al respecto la SSPD se ha pronunciado en el siguiente sentido, en el concepto No. 749 del 9 de septiembre del 2014:

*"(...) las funciones de los alcaldes y de los concejos municipales y distritales, aunque son complementarias, se encuentran delimitadas, pues mientras se encuentra a cargo de los alcaldes, definir los criterios con los cuales deberán asignarse los recursos destinados a sufragar los subsidios, corresponde a los cuerpos colegiados otorgar los subsidios y determinar el porcentaje de aporte solidario necesario para equilibrar el valor faltante entre subsidios y contribuciones.*

*De conformidad con lo anterior, la labor a cargo de las autoridades municipales o distritales, esto es, de los alcaldes y concejos municipales en este aspecto, es una labor mancomunada, que requiere de la participación conjunta de los dos actores, dentro de los deberes funcionales que la constitución y la ley, ha otorgado a cada uno de ellos.*

*(...)*

*En este orden de ideas es dable concluir, que tanto los Concejos municipales como los Alcaldes municipales o distritales, tienen establecidas sus funciones en la Constitución y en la ley, motivo por el cual, sus actuaciones deben sujetarse a las mismas, sin que les sea dable asumir funciones que no les corresponde, máxime si tomamos en consideración el hecho, de que se trata de las autoridades que ostentan la mayor jerarquía en estos entes territoriales."*

Así las cosas, este Despacho no estima procedente tener como válidos los Acuerdos Municipales objeto de estudio a fin de acreditar este requisito, porque como se demostró no concretaron el porcentaje de subsidios para acueducto y alcantarillado, razón por la cual no se ajusta a la normatividad vigente, además porque materias reguladas como la que nos ocupa no pueden dejarse al arbitrio de las autoridades que intervienen en su expedición.



De lo dicho, podemos concluir que el Municipio de Ramiriquí, no cumplió con el requisito relacionado con el reporte en el SUI del acuerdo de aprobación de porcentajes de subsidio y aporte solidario de acueducto, alcantarillado y aseo para la vigencia respectiva, expedido de conformidad con la Ley 1450 de 2011, por lo tanto el recurso formulado por el señor Omar Junco Espinosa, como representante legal del ente territorial no prospera y en consecuencia la resolución recurrida se confirma.

En este orden de ideas, este Despacho se remite a lo señalado en la citada resolución advirtiendo al municipio que debe recordar que cada vigencia se evalúa independientemente y en consecuencia, solo por el hecho sobre el cual se haya certificado al ente territorial en una vigencia anterior, no implica que de manera consecutiva deba adoptarse la misma decisión, máxime cuando está demostrado el incumplimiento del acuerdo municipal a los porcentajes de aporte solidario establecidos en la Ley 1450 de 2011 como ya fue expuesto, lo que de suyo conlleva a que este vedado para el despacho dar por cumplido dicho requisito.

En segundo lugar, con ánimo ilustrativo, este Despacho debe señalar que la obligación legal recayó desde un principio en el ente territorial, quien debió reportar los documentos de manera íntegra, so pena de ser descertificado por parte de esta Superintendencia, toda vez que el simple reporte del ente territorial llevaba a evidenciar un incumplimiento a uno de los requisitos establecidos dentro del proceso de certificación, lo que bastaba para descertificarlo según lo señalado en el Decreto 1077 de 2015. No obstante, esta Entidad abrió una etapa probatoria con anterioridad a proferir la resolución que decidió el proceso de certificación del municipio para la vigencia 2015, con ánimo garantista y en ejercicio de una potestad mas no en cumplimiento de una obligación, profiriendo el auto de pruebas en cuestión y comunicándolo al correo electrónico del municipio obrante en las bases de datos de la Entidad.

Sin perjuicio de lo expuesto, una vez verificado el documento aportado por el ente territorial, se advierte que no demuestra que el correo estuviera deshabilitado, toda vez que este fue reiniciado según el documento allegado por el ente territorial. Además, se reitera que esta Superintendencia cuenta con la prueba de entrega de la compañía 472 que demuestra que el correo institucional del municipio se encontraba en funcionamiento para la fecha de envío del auto de pruebas y en consecuencia se encontraba en resorte y responsabilidad del municipio la administración del mismo:



Certificado de comunicación electrónica		El servicio de envíos de Colombia	
Email certificado			
Identificador del certificado: E2191028-S			
Uelda S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercera de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.			
Detalles del envío			
Nombre/Razón social del usuario: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (CCANT 800250984)			
Identificador de usuario: 403387			
Remitente: correo@certificado-4-72.com.co (reenviado en nombre de ssps@superservicios.gov.co)			
Destino: contactenos@ramiriqui-boyaca.gov.co			
Fecha y hora de envío: 19 de Septiembre de 2016 (20:08 GMT -05:00)			
Fecha y hora de entrega: 19 de Septiembre de 2016 (20:09 GMT -05:00)			
Asunto: CORREO ELECTRONICO CERTIFICADO COMUNICACIÓN AUTO DE PRUEBAS SGP 2015 RAMIRIQUI - BOYACA (2016-4010520401)			
Mensaje:			
Adjuntos:			
Archivo	Nombre del archivo		
	Content0-text- html	Ver archivo adjunto	
	Content1-image-20164010520401.tif	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.	

Ahora bien, no existe prueba alguna que se haya violado algún derecho al administrado, por el contrario, se garantizó su derecho de defensa tal y como se observa en cada una de las resoluciones cuya revocatoria solicitó el municipio y que tornan en improcedente su solicitud tal y como se observa en el presente acto administrativo.

A su vez, se debe señalar que es un deber procesal de las partes tramitar los procesos a su cargo.

Por lo anterior, el argumento expuesto no está llamado a prosperar.

### 3.3 De los argumentos expuestos, relacionados con que los actos cuya revocatoria se solicita causan un agravio injustificado a una persona.

Respecto a los argumentos esgrimidos por el ente territorial se debe señalar en primer lugar que no señala las razones por las cuales considera que con las decisiones cuya revocatoria solicita, se causa un agravio injustificado no obstante lo cual, de manera general se debe señalar que la consecuencia de la descertificación está establecida en la ley.

En segundo lugar, se debe recordar que el proceso de certificación corresponde a una actuación administrativa atinente a la verificación de una serie de requisitos establecidos en los artículos 2.3.5.1.2.1.6 (requisitos generales para todos los entes territoriales) y 2.3.5.1.2.1.7 (requisitos adicionales para prestadores directos) del Decreto 1077 de 2015, según lo dispone el artículo 2.3.5.1.2.1.5 *ibidem*, que debe hacer la SSPD con el fin de establecer si los entes territoriales pueden ser certificados, lo que les permitirá administrar o no los recursos del SGP – APSB para cada vigencia.

Por consiguiente, es claro que el ente territorial tiene la obligación de cumplir unos requisitos taxativamente establecidos en las normas señaladas dentro de un término establecido. Para el caso concreto, vigencia 2015, el municipio de Ramiriquí debió acreditar, por expreso mandato normativo, los requisitos señalados en el artículo 2.3.5.1.2.1.6 del Decreto 1077 de 2015.

En este orden de ideas, el municipio como parte de la administración pública y sujeto al principio de legalidad de que tratan los artículos 150 y 338 de la Constitución Política, está sujeto al ordenamiento jurídico y por ende tiene que reportar la información establecida en el Decreto 1077 de 2015, para ser certificados para la administración de los recursos del SGP – APSB. El mencionado Decreto, señala expresamente las consecuencias de no acatar los requisitos contenidos en él, que no es otra distinta a la de quedar descertificados y, en consecuencia, no poder administrar los recursos para agua potable y saneamiento básico que le corresponden por SGP.

Lo anterior lleva a que sea clara la inexistencia de un agravio injustificado, toda vez que, se reitera, la Superintendencia evidenció que el municipio no cumplió la totalidad de requisitos (tal y como se expuso claramente en las resoluciones atacadas) por lo que aplicó la consecuencia establecida en el Decreto en cuestión.

Con fundamento en lo señalado, se puede concluir que en el trámite adelantado para resolver la certificación del municipio de Ramiriquí, se cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la

norma Constitucional y desarrollados por la jurisprudencia, esto es, con el debido proceso que rige toda actuación administrativa.

La resolución de descertificación fue proferida conforme a la Constitución y la Ley y en este sentido no se causó agravio injustificado al ente territorial, toda vez que está en el resorte del municipio cumplir con las normas que le atañen en cada uno de los procesos y asumir las consecuencias establecidas en las normas en caso de incumplimiento, sin perjuicio de lo cual es claro que en dicho caso el Departamento es quien debe administrar los recursos del SGP APSB y para ello está obligado a hacerlo conforme lo dispuesto en la Ley 1176 de 2007, sin que ello afecte la posibilidad de establecer sus tributos y participar en las rentas nacionales.

En este orden de ideas, el municipio no será privado de los recursos que le corresponden, únicamente no será quien los administre ya que ello corresponderá al Departamento de Boyacá.

De lo anterior es claro que, si el municipio no quiere ser sujeto a una descertificación, tiene que cumplir las normas que le son aplicables, en los tiempos establecidos por estas para tal fin y en un supuesto de descertificación debe asumir las consecuencias de la misma sin afectar la prestación de servicios públicos a sus usuarios.

En este orden de ideas, al no configurarse alguna de las causales establecidas en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011, no se accederá a la solicitud de revocatoria presentada por el municipio.

En mérito de lo expuesto, se

#### **RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- NO ACCEDER** a la solicitud de revocatoria directa presentada por el municipio de Ramiriquí – Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.

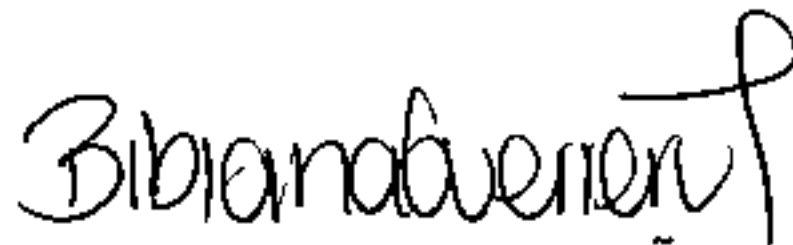
**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente resolución al representante legal del municipio de Ramiriquí – Boyacá, o a quien haga sus veces, haciéndole entrega de una copia de la misma y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR**, una vez en firme, el contenido de la presente resolución al Gobernador del Departamento de Boyacá, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y publicar en la página web de la SSPD.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra ella no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE**

Directora Técnica de Gestión de Acueducto y Alcantarillado

Proyectó: Katherine Arenas – abogada Grupo de Certificaciones e Información

Aprobó: Olga Rocío Yanquen Caro – Coordinadora Grupo de Certificaciones e Información

Expediente: 2016401351600827E